

La consulta plantea la posibilidad de otorgar la documentación reclamada por un heredero amparada en el interés legítimo del artículo 10 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Según se desprende del contenido de la consulta la información que se solicita es de una persona fallecida, por tanto la comunicación de los datos de una persona fallecida queda excluida de la Ley Orgánica 15/1999,

Es necesario indicar que esta Agencia Española de Protección de Datos ha venido tradicionalmente poniendo de manifiesto que el derecho fundamental a la protección de datos es un derecho personalísimo que, en consecuencia, se extingue por la muerte de las personas.

Este razonamiento ha venido amparándose en la vinculación existente entre el derecho a la protección de datos y la intimidad de las personas, si bien debe seguir considerándose aplicable tras la configuración otorgada a la protección de datos como derecho fundamental de la persona por la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre del Tribunal Constitucional.

En este sentido, si el derecho fundamental a la protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a decidir sobre la posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es propia, lo que se traduce en la prestación de su consentimiento al tratamiento, en el deber de ser informado y en el ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las personas, por lo que los tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999.

Dicho lo anterior, y desde la exclusiva perspectiva de la aplicación de la normativa de protección de datos, única sobre la que debe pronunciarse esta Agencia, el artículo 2.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone en su primer inciso que “este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas”, debiendo entenderse dicha previsión en el sentido de considerar que las normas de protección de datos no son aplicables a los fallecidos que han dejado de ser titulares de este derecho como consecuencia del fallecimiento, en los términos derivados de la aplicación del artículo 32 del Código Civil, toda vez que la personalidad se extingue como consecuencia de dicho fallecimiento.